FICHA DE JURISPRUDENCIA

DENTIFICACIÓN DE LA SENTENCIA Fallo de 23 de Noviembre de 1992. Gaceta Oficial No. 22,269 de 22 de abril de 1993.

PALABRAS CLAVE (5) RECURSO, IMPUGNACION, LEGISLADOR, RESOLUCIONES, GARATÍAS.

MAGISTRADO PONENTE	
PARTE DEMANDANTE	David Heres Zafrani
REPRESENTANTE JUDICIAL	Dr. José J. Caballos
NORMAS INFRACONSTITUCIONALES ATACADAS	Resolución 45-90 de 23 de mayo de 1991 y Reparto No. 45-90 de 10 de junio de 1991, Dictadas por el Tribunal Electoral. (Mediante las cuales rechazan el recurso de impugnación interpuesto en contra de la proclamación de MIGUEL BUS RIOS, como legislador principal electoral por el circuito 3-1 de la Provincia de Colón.
NORMAS CONSTITUCIONALES ALEGADAS COMO VIOLADAS	Artículos 17,32 y 136.
ALEGATOS DEL DEMANDADANTE	<p>El Dr. JOSE J. CABALLOS hijo, en representación de DAVID HERES ZAFRANI, solicita al Pleno de la Corte Suprema de Justicia se declare la inconstitucionalidad de las Resoluciones de 23 de mayo de 1991 y 10 de julio de 1991 (Reparto 45-90) dictada por el Tribunal Electoral, mediante las cuales rechaza el recurso de impugnación interpuesto en contra de la proclamación de MIGUEL BUSH RIOS, como legislador principal electoral por el circuito 3-1 de la Provincia de Colón, por ser violatoria de los artículos 17,32 y 36 de la Constitución Política.</p> <p>Al exponer el concepto de las infracciones, el demandante se refiere a los artículos 17, 32 y 136 de la Constitución los que habrían sido violados por las resoluciones que rechazan la impugnación propuesta por su representado. y el Código Electoral que regula los juicios que deben interponerse ante el Tribunal Electoral y que en consecuencia infringen el artículo 17 el demandante se limita afirmar que las resoluciones impugnadas violan la Constitución y el Código Electoral que regula el juicio que deben interponerse ante el Tribunal Electoral, y que en consecuencia infringen el artículo</p>

	<p>17 en forma directa, por omisión, sin abundar en mayores razonamientos.</p> <p>Al referirse al artículo 32, tras expresar que la primera proposición de esta norma constitucional garantiza que las personas pueden hacer uso de los procesos legales como instrumentos para lograr sus pretensiones, afirma que con fundamento en esa garantía su representado impugnó la proclamación de Mirguel Bush Ríos, como legislador electoral, que en una primera etapa el Tribunal Electoral rechazó de plano la impugnación , que la Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad de las resoluciones que rechazaron la impugnación y que planteada nuevamente la impugnación, el Tribunal Electoral volvió a rechazar la acción de su mandante invocando razones distintas, específicamente que la demanda había sido presentada en forma extemporánea, desconociendo que su representado la presentó dentro del término de 3 días del artículo 455 del Código Electoral.</p> <p>El demandante estima violado también el artículo 136 de la Carta Fundamental al establecer esta norma, entre las tareas del Tribunal Electoral, la interpretación y aplicación privativa de la Ley, pero esto no quiere decir que esta Corporación tenga la potestad de hacerlo en contradicción de la letra y del espíritu de las normas legales.</p> <p>Finalmente, afirma que cuando la ley ordena dar traslado de la demanda de impugnación y el Tribunal Electoral adopta una decisión distinta, éste viola la obligación que le impone la Constitución de interpretar y aplicar las leyes electorales por lo que el artículo 136 resulta violado en forma directa por omisión, ya que se rechazó la impugnación de su representado.</p>
VISTA DEL MINISTERIO PÚBLICO	<p>Según el representante del Ministerio Público, no procede el cargo de inconstitucionalidad que se hace con relación al artículo 17, no solo porque el demandante no ha expresado categóricamente en que consiste el concepto de infracción , sino porque hay jurisprudencia reiterada de la Corte Suprema de Justicia en torno a la naturaleza programática de esta disposición que se limita a señalar de manera genérica las funciones de las</p>

	<p>autoridades de la República, sin consagrar garantía constitucional alguna.</p> <p>Tampoco, a su juicio, resulta violatorio el artículo 32 constitucional sobre el Debido Proceso, que como se sabe, consagra las garantías fundamentales a de ser juzgado por la autoridad competente a que el proceso se surta conforme a los trámites legales <i>y no a ser juzgado más d una vez por la misma causa penal, policiva o disciplinaria.</i></p> <p>En este negocio, según el Procurador de la Administración, el Tribunal Electoral, autoridad competente para conocer la impugnación contra la proclamación de Miguel Bush Ríos legislador electoral por el circuito 3-1, actuó conforme a los trámites legales ya que al rechazarla por extemporánea, lo hizo con fundamento en los artículos 2994, 300, 36 y 455 del Código Electoral y el literal “a” y el parágrafo del artículo 6 del Decreto 111 de 21 de noviembre de 190.</p> <p>Estas disposiciones legales y reglamentarias establecen dos términos dentro de los cuales se pueden presentar impugnaciones contra las proclamaciones de los legisladores elector, a saber dentro de los tres días siguientes, contados a partir de la proclamación hecha por la Corporación Electoral, o dentro de los dos días siguientes a la publicación de la proclamación hecha en un diario de circulación nacional, vencidos los cuales quedan firmes las proclamaciones y que las impugnaciones presentadas fuera de dichos términos, “conlleva el rechazo del recurso”</p> <p>Finalmente, el funcionario también descarta que se haya dado violación al artículo 136, ya que tampoco esta disposición consagra garantías de derechos subjetivos, siendo una norma de carácter orgánico en la que se establecen los fines, estructura, funciones y jurisdicciones del Tribunal Electoral.</p>
ALEGATOS DE TERCEROS	
PARTE MOTIVA	
<ul style="list-style-type: none"> Ratio Decidendi 	De manera preliminar deben desestimarse los cargos de inconstitucionalidad que se hacen con relación a los artículos 17 y 136 de la Constitución

Política.

Como bien expone el Procurador de la Administración, reiterados son los precedentes jurisprudenciales que han fijado el carácter programático del artículo 17 que de manera genérica señala los fines para los que están instituidas las autoridades de la República, y no tiene un carácter preceptivo garantizador de derechos subjetivos específicamente determinado.

Igual puede decirse del artículo 136, norma de naturaleza orgánica que instituye el Tribunal Electoral para garantizar la libertad, honradez y eficacia del Sufragio popular.

Esta disposición establece la estructura, jurisdicción, composición, funciones y responsabilidad de este tribunal, que la propia Constitución califica de autónomo y no consagra tampoco garantías individuales ni sociales.

No puede argumentarse entonces, que el demandante no se le concedió oportunidad razonable de ser oído por un tribunal competente. Si precluyó su derecho en esa oportunidad, se debió a su falta de diligencia y no a conducta irregular imputable al Tribunal Electoral.

Por estas razones, la Corte debe centrar su atención únicamente en el artículo 32 y determinar, si al rechazar la impugnación formulada por DAVID HERES ZAFRANI, el Tribunal Electoral violó de alguna manera la garantía constitucional del Debido Proceso.

En numerosos precedentes, la Corte ha fijado el sentido y alcance de las garantías del Debido Proceso consagrado en el artículo 32, como una institución instrumental en virtud de la cual debe asegurarse a las partes de todo proceso legal, oportunidad razonable de ser oídas por un Tribunal competente predeterminado por la ley, independiente e imparcial, de pronunciarse respecto de las pretensiones y manifestaciones de la parte

	<p>contraria, de aportar pruebas lícitas relacionadas con el objeto de uso de los medios de impugnación consagrados por la ley contra resoluciones judiciales motivadas y conforme a derecho, de tal manera que las personas puedan defender efectivamente sus derechos (Ver entre otras, la sentencia del Pleno de la Corte del 28 de agosto de 192).</p> <p>Por las consideraciones anteriores, el PLENO DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA QUE NOS SON INCONSTITUCIONALES, las resoluciones de veintitrés de mayo de 1991 y de diez de julio 1991 (Reparto No. 45-90) en las causales se rechaza por extemporáneo el recurso de impugnación contra la proclamación del señor MIGUEL BUSH RIOS, Legislador Principal efecto por el Circuito 3-1.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Obiter Dicta 	
PARTE RESOLUTIVA	
<ul style="list-style-type: none"> • Normas declaradas inconstitucionales 	
<ul style="list-style-type: none"> • Normas declaradas constitucionales 	Resolución 4590 de 23 de mayo de 1991 y Reparto No. 45-90 de 10 de junio de 1991
<ul style="list-style-type: none"> • Otras resoluciones 	
SALVAMENTO DE VOTO	
Voto Particular	
<ul style="list-style-type: none"> • Voto disidente 	
<ul style="list-style-type: none"> • Voto concurrente 	
ACLARACIÓN DE SENTENCIA	